

CHILE EN CIFRAS MAPA SOCIAL



EN ESTA EDICIÓN

- La educación escolar en Chile bajo la mirada de Lindsey Burke
- A fondo con la Encuesta de Victimización Paz Ciudadana-Adimark: revisión de las cifras y entrevista con Javiera Blanco
- Mary O' Grady: Los ambientalistas de Estados Unidos versus los pobres de Chile
- Análisis sobre los subsidios en la población indígena
- Opinión sobre los problemas financieros en la Zona Euro

INDICE revista n° 220 / agosto 2011

ISSN 0716-9418



EDITORIAL	4
REPORTAJE	5
Mapa social de Chile: Una mirada diferente a las cifras que definen el país	
EDUCACIÓN	8
Lindsey Burke: La elección escolar da resultado	
TEMAS PÚBLICOS	10
Encuesta de Victimización de Paz Ciudadana: Luces amarillas	
ENTREVISTA	14
Javiera Blanco: "Todavía somos un país con una centralización importante en materia de seguridad"	
OPINIÓN	17
Mary O' Grady: Ambientalistas de Estados Unidos versus los pobres de Chile	
ANÁLISIS	19
Subsidios e indígenas: Mayor dependencia	
ECONOMÍA INTERNACIONAL	21
Zona Euro: Serios y duraderos problemas financieros	
TEMAS PÚBLICOS	23
Bono AUGE: Caída en las listas de espera para atenciones	
CONGRESO	25
ACTIVIDADES	27

Suscripciones a Revista Libertad y Desarrollo: (56-2) 377 4826 / o al mail: suscripcion@lyd.org

EDITORIAL

En las últimas semanas la educación se ha tomado la agenda, con una complicada combinación de paros, negociaciones y propuestas. Día a día aparecen nuevas demandas, nuevas respuestas y es difícil seguirle el ritmo a la polémica. En este conflicto puntual, como en muchos otros de la actualidad, vemos la importancia de ordenar, jerarquizar y presentar bien la información para que los ciudadanos se puedan formar sus propias opiniones. Por esto, quisimos reservar la portada de la edición de agosto de la revista de Libertad y Desarrollo a un ambicioso proyecto que vio la luz después de dos años de trabajo: el libro "Chile: Mapa Social". En atractivas infografías se presentan al lector miles de datos sociales para formarse un panorama de la realidad chilena en temas de familia, salud, educación y otros. Entrevistamos a algunos de los diseñadores involucrados para que nos contaran de un proceso que esperamos se replique en otras áreas.

Sobre el tema de la educación, recurrimos a la mirada de Lindsey Burke, experta de Heritage Foundation, quien visitó escuelas chilenas en junio pasado y escribió un artículo publicado en su país donde enfatiza la importancia de la libre elección de los padres en la educación primaria.

Para entender más sobre las últimas cifras de delincuencia, les ofrecemos el análisis de LyD y entrevistamos a Javiera Blanco, Directora de la Fundación Paz Ciudadana. A pocos días de dar a conocer la Encuesta de Victimización Paz Ciudadana-Adimark, comentó las cifras y evaluó las políticas implementadas en la materia.

En el tema ambiental, reproducimos una columna de Mary O'Grady publicada recientemente en el Wall Street Journal sobre los efectos de la causa ecologista en Chile. Esta destacada editorialista se apoyó en información de Libertad y Desarrollo para argumentar que el lobby de grupos ambientalistas norteamericanos está entorpeciendo el desarrollo energético chileno.

En materia internacional, tras haber superado el impasse presupuestario norteamericano, al menos en el corto plazo, los ojos se vuelcan a la debilidad europea. En una columna, Francisco Garcés, Director del Centro de Economía Internacional de LyD, analiza el escenario de Grecia y de sus vecinos.

Una mirada al avance de las listas de espera en materia de salud y un panorama de las entregas de subsidios indígenas también van en estas páginas.



DIRECTOR REVISTA

Luis Larraín A.

EDITORA

Marily Lüders M.

COMITE EDITORIAL

Denise Couyoumdjian B.

Cristina Cortez C.

Rodrigo Delaveau S.

Hernán Felipe Errázuriz C.

Luis Larraín A.

Alicia Lecaros E.

Marily Lüders M.

Daniel Montalva A.

Rafael Vicuña E.

DISEÑO Y DIAGRAMACION

Marmota Diseño Integral

www.marmota.cl

FOTOGRAFIA

Marcela Cerda V.

Claudio Gálvez J.

Magdalena Lecaros E.

Archivo LyD

IMPRESION

Quebecor World Chile S.A.

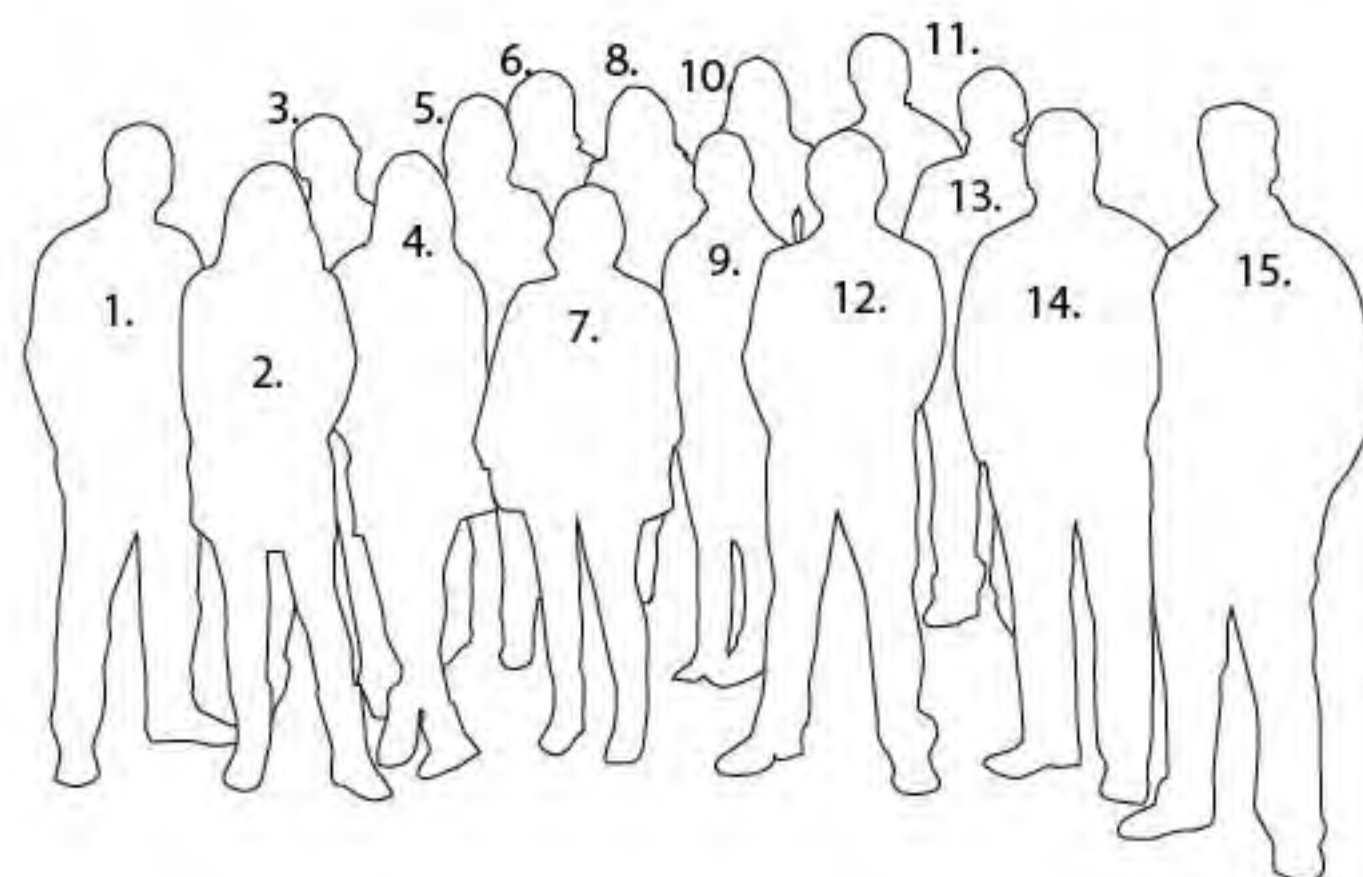
Mapa social de Chile:

Una mirada diferente a las cifras que definen el país

En julio, Libertad y Desarrollo culminó un proyecto que duró más de dos años y que involucró a un equipo interdisciplinario de diseñadores e investigadores. En esta publicación se presentan miles de datos sociales del país de una manera cercana y atractiva.



1. Dany Berczeller, Diseñador
2. Macarena López, Diseñadora
3. Fernando Costa, Diseñador
4. Josefina Heiremans, Ayudante de Coordinación
5. Francisca de Iruarrizaga, Editora
6. Rosita Camhi, Editora
7. Carla Escobedo, Diseñadora
8. Denise Montt, Dirección, coordinación y diseño
9. María Paz Arzola, Información y edición
10. Carla Bahna, Diseñadora
11. Rodrigo Ramírez, Diseñador
12. Marcelo Duhalde, Diseñador
13. Jan Beckhaus, Diseñador
14. Cristián González, Diseñador
15. José Manuel Allard, Diseñador



La multiplicidad y gran cantidad de información social que se acumula en la actualidad hace indispensable ordenarla y jerarquizarla para poder sacar buenas conclusiones de los datos. Dada la complejidad de este mundo de datos, sólo los expertos pueden navegar en él y organizar la información para efectuar sus análisis.

Este proyecto, que hoy ve la luz tras dos años de intenso trabajo, precisamente cuestiona eso y busca que las informaciones sociales sobre el país en que vivimos sean accesibles a un público general.

El libro "Chile: Mapa Social" nació inspirado

en un modelo estadounidense de mostrar los datos para consolidar y simplificar la información entregada por fuentes oficiales, centros de estudios y universidades.

Su aplicación en Chile comenzó a gestarse en Libertad y Desarrollo, en el programa social que entonces dirigía Felipe Kast, el saliente Ministro de Mideplan. La ambiciosa meta detrás de esta publicación logró convocar a un grupo excepcional dispuesto a trabajar con profesionales de otras disciplinas codo a codo para lograr plasmar datos en infografías de excelencia. Investigadores especializados unieron fuerzas con diseñadores y el resultado son 10 capítulos que abarcan los principales

temas que marcan la agenda social en Chile.

La idea es que el lector podrá entrar a un tema social de manera directa y completa. Las áreas fueron elegidas por ser las más importantes para el diagnóstico social en Chile y por haber estado en el centro del debate en los últimos años: pobreza, educación, salud, ciudad, pueblos originarios, familia, cultura, seguridad, trabajo y vivienda.

En estas páginas le pedimos a tres de los diseñadores convocados que nos dieran su mirada de un proceso que debería abrir las puertas a nuevas instancias que permitan mostrar las cifras de manera creativa.

Tres diseñadores cuentan su experiencia en el proyecto

FERNANDO COSTA

¿Cuáles son los objetivos que se fijaron al momento de trabajar con datos sociales en este libro?

El principal objetivo fue tratar de desarrollar un sistema donde se pudiese obtener una visión general de los datos provistos para entender las tendencias, pero manteniendo la posibilidad de "meter el ojo" en los gráficos y poder rescatar datos específicos en una plataforma codificada y ordenada que permitiera compararlos y llevar al lector a sacar conclusiones (o generar información) a partir de los datos entregados, más allá de lo obvio.

¿Qué ventajas tiene la presentación en infografías de esta información versus tablas o texto?

Principalmente es la posibilidad descrita en la pregunta anterior. Las capas simultáneas de información, su codificación y parámetros gráficos fácilmente reconocibles permiten una comprensión mayor y más libre de la data expuesta. Con una tabla uno necesitaría una capacidad de análisis abstracto bastante importante (y mucho tiempo, dedicación e información o contextos previos que el público no siempre tiene). Los textos, por otro lado, tienden a tener sesgos editoriales que exponen un punto de vista más que intentar retratar la realidad cruda (o dicho de otra forma, pueden ser más persuasivos que expositivos). Esto limita, a mi juicio, la capacidad del espectador de construir sus propios juicios.

Todo esto aporta a la horizontalización o transversalización del acceso a generar información, entregando herramientas didácticas para que gente sin preparación previa pueda construir juicios propios y ayudarse a tomar mejores decisiones o posturas a partir de la valiosa data disponible en los estudios públicos.

DANY BERZELLER

¿Cuáles son los objetivos que se fijaron al momento de trabajar con datos sociales en este libro?

En nuestro caso, nos tocó el tema "familia", lo que significó pensar cómo entregar los datos en código simple y amigable. Revisamos un montón de citas, hasta que llegamos al trazo ilustrativo que usamos finalmente, el que nos remite al dibujo de un niño.

¿Qué ventajas tiene la presentación en infografías de esta información versus tablas o texto?

La "gracia" de trabajar con infografías... más bien diseño de información, es que uno puede presentar de manera didáctica, información muy compleja y densa. Esto significa mucho trabajo, mucha búsqueda, ensayo y error, investigación... la idea es que el lector capte rápidamente la idea y pueda de manera simple comprender lo que se le presenta.



¿Cuáles son las etapas, en términos generales, que se realizan para pasar de los datos hasta la infografía?

En mi caso, lo primero que hago es evaluar la data, clasificarla, ordenarla y jerarquizarla. Luego se evalúa cuál es el criterio gráfico más adecuado para visualizar cada entrada en el sistema (y aquí hay un largo proceso de negociación y validación de los parámetros definidos en la primera etapa) para lograr una "máquina" que funcione bien. Luego se somete la data a estos criterios y se evalúan los resultados. Finalmente, luego de corregir la estructura, se da paso a terminar la "capa gráfica", definiendo elementos como tipografía, diagramación, paletas de colores, iconografía, etc., que dan el tono general de la pieza.

¿Cuál es su evaluación general del producto final y cuál cree que será su aporte?

Creo que el proyecto es muy interesante como iniciativa y espero que, por un lado, sirva para que los chilenos puedan entender mejor cómo funciona nuestro país, las causas y consecuencias de las dinámicas actuales, de dónde venimos y para donde vamos. Por otra parte espero que abra los ojos de la gente que hoy toma las decisiones hacia cómo la información, expuesta y trabajada de la manera correcta, puede convertirse en un vehículo de comprensión, potenciador del debate con altura de miras y a la larga en agente de participación y cambio en sociedades en crecimiento como la nuestra.

¿Cuáles son las etapas, en términos generales, que se realizan para pasar de los datos hasta la infografía?

1. Comprensión de la información (estudio, análisis, investigación, consulta, etc.)
2. Elección de la línea gráfica (estilo, formato, técnica)
3. Construcción
4. Testeo
5. Corrección

¿Cuál es su evaluación general del producto final y cuál cree que será su aporte?

Me parece un proyecto interesante, con mucho esfuerzo y dedicación. Por ser la primera vez, creo que todos aprendimos, tanto de los errores como de los aciertos. Ojalá se repita la experiencia y se convierta en un documento de consulta para todos los interesados en este tipo de datos.

XIMENA ROSELLÓ

¿Cuáles son los objetivos que se fijaron al momento de trabajar con datos sociales en este libro?

El principal objetivo fue lograr comunicar datos que son duros en forma tal que fuesen fácilmente entendibles para la gente. También me pareció importante crear infografías que fueran altamente legibles y simples, pero que transmitieran de alguna forma el tema social que me tocó. Esto último no fue fácil, porque la cultura está presente en absolutamente todo lo que hacemos, es por eso que generé ilustraciones más bien descriptivas.

¿Qué ventajas tiene la presentación en infografías de esta información versus tablas o texto?

Creo que la principal ventaja es que se puede transmitir cierto tipo de información, como cantidades, en forma instantánea. Cuando veo un párrafo de texto o una tabla con números, tengo que leer toda la información para poder establecer una comparación entre los datos que se presentan. Al mostrar esos mismos datos en forma visual, puedo ver inmediatamente la diferencia entre lo que se está comparando.

Otra ventaja es que se le da libertad al lector para recorrer la infografía a su propio ritmo, centrándose en aquellas cosas que le parecen más interesantes. Para lograr eso es importante generar un orden de lectura que indique dónde hay que mirar primero, pero que no limite el recorrido (por ejemplo: destacar bien los títulos de cada gráfico, poner más grande las cosas que son más relevantes, etc.). El secreto de una buena infografía es alcanzar un balance entre la simplicidad visual y la complejidad de la información entregada.

Las infografías también son más "amigables", menos áridas. ¿A quién le interesaría leer un informe de 20 páginas llenos de tablas, si puedo ver la misma información en una lámina fácil de digerir?

¿Cuáles son las etapas, en términos generales, que se realizan para pasar de los datos hasta la infografía?

Como había mucha información de todo tipo, primero la agrupé en

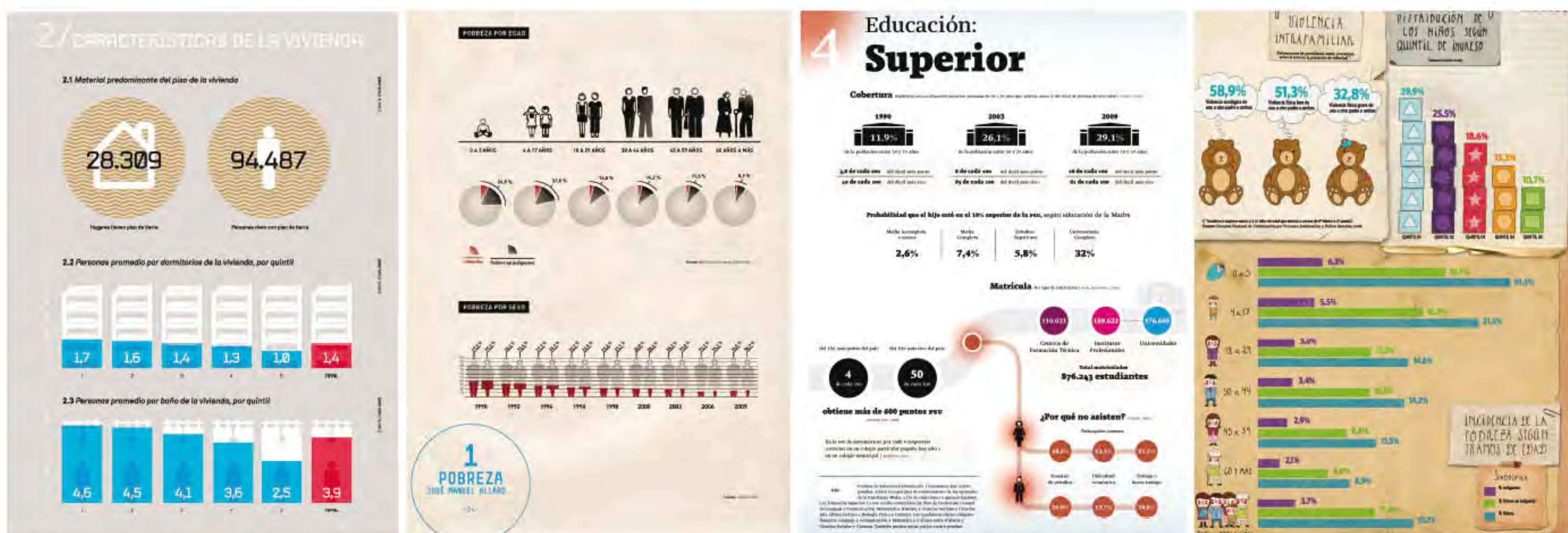


temas principales (tv, cine y recreación; artes escénicas; lectura y comunicación). Luego analicé el contenido para definir en qué forma lo iba a presentar, es decir, qué tipo de gráficos iba a generar. Esa fue la etapa más lenta de todas. Finalmente, generé las ilustraciones con un estilo visual acorde al tema, pero que no entorpeciera la lectura de los gráficos.

¿Cuál es su evaluación general del producto final y cuál cree que será su aporte?

Personalmente me gustó el resultado, creo que se logró el objetivo de hacer más accesible la información y se dio una buena mezcla de estilos gráficos. El aporte que tendrá sin duda dependerá de cuánto se difunda el libro. Sería interesante saber qué opina la gente que no participó en el proyecto, para ver si en verdad la información es fácil de entender.

Ojalá se sigan desarrollando proyectos de este tipo, porque son una excelente oportunidad para demostrar que el objetivo del diseño es comunicar en forma efectiva y no sólo generar piezas bonitas o estilasas. **LyD**





La elección escolar **da resultado**

Tras su visita a Chile para participar en el seminario "Calidad y Gestión en Educación 2011" de LyD, la analista de Heritage Foundation, Lindsey Burke, relata en este artículo su experiencia en el país y analiza la educación escolar a través de ejemplos concretos, concluyendo que hay lecciones que pueden ser aplicadas a la reforma educativa en Estados Unidos.

Cuarenta y cinco niños de jardín de infancia se sientan atentos en una fría aula de una escuela pobre a las afueras de Santiago, Chile. Vestidos con uniformes blancos y azules, esperan pacientemente a la siguiente instrucción de su profesor, con algún niño cruzando la pequeña sala ocasionalmente para llevar materiales escolares a su sitio particular.

En un vecindario plagado de drogas y violencia, la escuela privada de bonos escolares es un refugio para los niños de familias de bajos ingresos que allí residen. Para muchos, la vida en sus hogares está plena de negligencia: padres sin trabajo (si hay padres), condiciones de vida insalubres y familiaridad con los sonidos que acompañan a los traficantes de drogas locales, sonidos que deberían ser los de la música del carrito de los helados.

Pero a pesar de los incalculables obstáculos que hay ante ellos, la Escuela San Joaquín les da esperanzas. San Joaquín provee una educación de alta calidad al 100% de la población escolar de bajos ingresos a la que presta servicios. Los profesores tienen vocación, el nivel es riguroso, la estructura es la piedra angular de la rutina de la escuela.

Este colegio de bonos escolares, tiene puntajes de lectura y matemáticas muy por encima del promedio nacional. La escuela gasta sólo US\$ 150 por niño mensualmente, pero día a día refuerza la simple verdad de que todos los niños pueden aprender y que deben tener la oportunidad de trascender su ambiente pobre.

Es un perturbador estudio de contrastes con muchas escuelas americanas, donde aunque el gasto anual por niño excede los US\$10.000, los resultados son decepcionantes.



En Chile, la elección escolar ha jugado parte integral de los intentos del país por mejorar el conjunto del sistema educativo al proporcionar más opciones a las familias y poner presión con la competencia al sistema educativo público para que mejore.

Aunque la Escuela San Joaquín es uno de los colegios de alto rendimiento del país, Chile está trabajando para mejorar los resultados en toda la nación. Como en Estados Unidos, Chile se esfuerza por aumentar los niveles del logro académico para todos los niños a la vez que se reducen las diferencias de rendimiento entre estudiantes de altos y bajos ingresos. En años recientes, Chile ha llegado a ver un aumento de logros en lectura y una ligera reducción de la diferencia del rendimiento entre niños de bajos ingresos y sus iguales más aventajados.

Las iniciativas tomadas para crear mayor transparencia sobre el rendimiento escolar podrían haber contribuido a los recientes aumentos observados. El país emplea ahora un sistema de "semáforos", clasificando a las escuelas en verde, amarillo o rojo según los resultados de los exámenes de competencia académica. Se atribuye al sistema de semáforos la provisión de más información para los padres sobre dónde inscribir a sus hijos y sirve para poner algo de presión a las escuelas de bajo rendimiento para que mejoren sus resultados.

El sistema educativo chileno está dividido en tres tipos de colegios:

1. Municipales (públicos) que, como en Estados Unidos, proveen educación pública gratuita pagada por el contribuyente a las familias de todo el país.

2. Colegios privados con bono escolar, que son instituciones privadas que reciben un subsidio fijo del Gobierno según el número de niños que asisten (y que pierden ingresos si un niño decide trasladarse a otra escuela).

3. Colegios privados, pagados, que no reciben dinero del contribuyente y exigen a los padres que paguen por la educación al igual que la mayoría de escuelas privadas en Estados Unidos.

En Chile, la elección escolar ha jugado parte integral de los intentos del país por mejorar el conjunto del sistema educativo al proporcionar más opciones a las familias y poner presión con la competencia al sistema educativo público para que mejore.

En un artículo de abril de 2011 de Libertad y Desarrollo, institución chilena de política pública, se comenta: según los datos del Ministerio de Educación, entre 2000 y 2010 casi 500.000 estudiantes se fueron del sistema educativo público municipal; 500 escuelas cerraron en ese periodo mientras que se crearon aproximadamente 2.000 escuelas privadas subsidiadas.

Como Estados Unidos, Chile lucha con una burocracia educativa centralizada (con casi toda la autoridad para la toma de decisiones en lo relativo a educación concentrada en las manos del Ministerio de Educación en Santiago, la capital). De modo similar

a la carga de papeleo que se le impone a las escuelas locales desde Washington, la creciente burocracia de Santiago sobrecarga las escuelas locales. Por ejemplo, el nuevo "Programa de Apoyo Compartido" duplica el "Programa Preferencial de Subsidio Escolar" que ya tiene el país, parecido a lo que el Título I en América concede a colegios en lugares de bajos ingresos.

El éxito de la Escuela San Joaquín se debe a profesores comprometidos, un director volcado a su tarea y un entorno escolar estructurado que no hay en los hogares de la mayoría de los niños pobres de Santiago. Al igual que los exitosos colegios de bajos ingresos en Estados Unidos, la dedicación de los líderes locales, que tienen un conocimiento minucioso de las necesidades de los niños de su comunidad, marca la diferencia.

Aunque el Ministerio de Educación de Chile tiene por intención ampliar su control sobre las escuelas locales (por ejemplo, cada administración tiene capacidad de retocar el currículum nacional que todas las escuelas deben seguir), hay lecciones en todo esto que se pueden aplicar a la reforma educativa en Estados Unidos: mantener la toma de decisiones educativas a nivel local, aumentar la transparencia de resultados y, sobre todo, empoderar a los padres. **LyD**



Foto: Dimitris Ouzounis

Encuesta de Victimización de Paz Ciudadana: **LUCES AMARILLAS**

Si bien los resultados del primer semestre de 2011 en materia de delincuencia son una alerta potente para las autoridades encargadas de la seguridad pública, se debe ser cauteloso a la hora de sacar conclusiones extensivas. Aún deben analizarse las próximas mediciones, que confirmarán si se trata o no de una nueva tendencia al alza y, a la vez, trabajar en la acertada agenda que impulsó el Gobierno en materia de seguridad ciudadana.

Esta semana se dieron a conocer las cifras correspondientes al primer semestre de 2011 de la Encuesta de Victimización de la Fundación Paz Ciudadana-Adimark, instrumento que ha venido midiendo la victimización por robos desde el año 2000. El debate público se ha centrado en el aumento del porcentaje de victimización por delitos de robo o intentos de robo en los últimos seis meses, desde 33,0% a 37,9%.

Si bien se trata de una señal preocupante -pero específica, ya que sólo considera el delito de robo- y una alerta potente para las autoridades encargadas de la seguridad pública, se debe ser cauteloso a la hora de sacar conclusiones extensivas. Aún debe analizarse si se trataría de un claro y definitivo quiebre de

tendencia a la baja que se venía produciendo en los últimos años, como ha sido sostenido por diversos personeros de la Concertación.

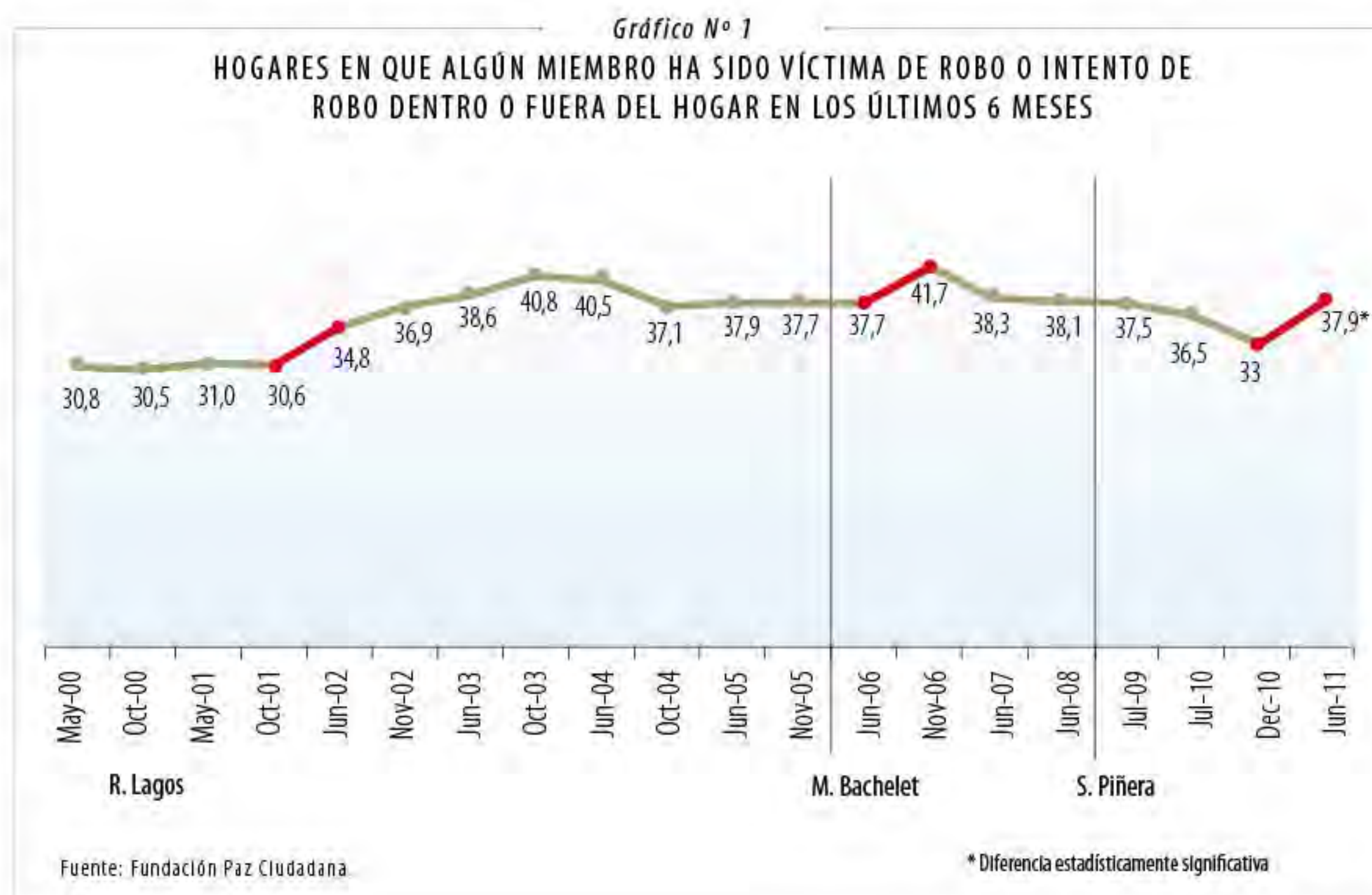
Lo anterior es relevante puesto que entre los expertos existe consenso en que las cifras de victimización de 2010 –afectadas por el terremoto 27F– pueden distorsionar los análisis de las cifras de 2011, como ha sucedido en otras áreas estadísticas. Así, sólo las próximas mediciones –incluida la próxima Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) con los datos de 2011– confirmarán si se trata o no de una nueva tendencia al alza. En cualquier caso, el Gobierno ha recibido una clara invitación para repotenciar su agenda de combate a la delincuencia.

CIFRAS DE VICTIMIZACIÓN

Las encuestas de victimización han demostrado ser un instrumento de medición superior –aunque complementario– al de las denuncias a la hora de intentar medir el fenómeno criminológico. La literatura en la materia es abundante¹. En particular, y hasta antes de la ENUSC 2003 del Gobierno, la Encuesta de Victimización de Paz Ciudadana –centrada sólo en robos– ha sido el indicador más confiable que tenemos en la materia ya que existe una larga serie desde 2000 que considerar seriamente.

Entre los resultados más relevantes entregados por la encuesta, destaca el ya mencionado aumento de la victimización de hogares desde un 33 % en la encuesta de diciembre de 2010, a un 37,9% en la nueva. Se trata de la tercera alza significativa en los últimos 10 años, existiendo otras similares en junio de 2002 –de 30,6% a 34,8– y junio de 2006 –de 37,7% a 41,7%– (Gráfico N° 1). Destaca también el hecho de que el alza es superior en regiones que en Santiago.

Por otra parte, si se desagrega la victimización por robo por nivel socio económico, el más afectado es el segmento "Bajo", el que aumenta de 29,4% a 35% en comparación



Cuadro N° 1
CONCENTRACION DE LA VICTIMIZACIÓN EN EL GRAN SANTIAGO (TOTAL MUESTRA: 4.040 HOGARES)

AREA	JUL-10	DIC-10	JUN-11	DIFERENCIA JUL-10 A JUL11	CAMBIO % JUL-10 A JUL-11
Norponiente	40,5	35,6	40,4	-0,1	-0,2%
Nororiente	35,7	29,4	33,8	-1,9	-5,3%
Surponiente	37,6	35,4	43,0	5,4*	14,4*
Suroriente	39,2	34,5	37,6	-1,6	-4,1%

Fuente: Fundación Paz Ciudadana. *Diferencia estadísticamente significativa.

a diciembre de 2010. Asimismo, analizada la concentración de la victimización en Santiago, puede observarse que el mayor aumento se encuentra en el área surponiente, donde pasa desde el 35,4% en diciembre de 2010 a un 43% en la actualidad (Cuadro N° 1).

Asimismo, siguen siendo preocupantes las cifras de re-victimización, esto es, el número de veces (dos, tres o más) en que algún miembro de la familia ha sido víctima de robo o intento de robo, porcentaje que pasa del 19,7% a 24,9%, en comparación a diciembre de 2010.

Finalmente, también se debe estar atento a la variación que experimenta el nivel de temor "alto", el que si bien todavía se mantiene en niveles relativamente bajos, registró un leve aumento (12,2% a 13,9%) en comparación a la encuesta de 2010.

La encuesta entrega algunas señales positivas. En materia de denuncias, por ejemplo, ha existido un aumento sistemático y consistente en ellas desde junio de 2009, llegando a 62,8%. Lo anterior es una señal positiva que demuestra que la ciudadanía ha ido aumentando su confianza en las autoridades encargadas de

velar por la seguridad pública, dado que la cifra negra (la no denuncia) se ha reducido drásticamente en los últimos años, siendo la más baja de la década (37,2%). También es posible destacar que el nivel de satisfacción con la actuación de las policías aumentó de 43,3% a 48,2%.

En todo caso, la actitud vigilante en la materia debe seguir siendo intensa. Debemos tener presente que las últimas comparaciones internacionales han ubicado a Chile en niveles de victimización altos en algunos delitos específicos como robo desde vehículo o robo con violencia, en relación a países desarrollados².

El Gobierno cuenta hoy con una serie de programas e iniciativas en curso en el marco del Plan 2010-2014 Chile Seguro, con ambiciosas metas de reducción de la victimización. Destaca de este Plan el aumento de dotación de 10 mil carabineros y 1.000 policías, la ampliación del Plan Cuadrante en 50 comunas más y la próxima implementación de un sistema unificado de información criminal georreferenciada, al que tendrán acceso todas las instituciones de seguridad pública.

En cuanto a la política carcelaria, se está implementando un programa de construcción que sumará cuatro nuevas cárceles -entre las que se incluye un centro de clasificación de reclusos para efectos de permitir planes de segregación penitenciarios efectivos-, con un total de 2.400 plazas y la infraestructura necesaria para que puedan trabajar, el cual es indispensable acelerar. En mayo se promulgó el reglamento que establece un estatuto laboral y de formación para el trabajo penitenciario y ya se comenzó con el plan de bloqueo de celulares al interior de los penales.

En lo estrictamente policial, se está levantando información acerca de los procedimientos de investigación y el personal asignado para estos fines en ambas policías, ello para proponer mejorar la función investigativa y la



Foto: M D/ Jomagam

La actitud vigilante en la materia debe seguir siendo intensa. Debemos tener presente que las últimas comparaciones internacionales han ubicado a Chile en niveles de victimización altos en algunos delitos específicos como robo desde vehículo o robo con violencia, en relación a países desarrollados.

distribución de los requerimientos de Fiscalía. Adicionalmente se encuentra en estudio la implementación de equipamiento tecnológico para el trabajo en el sitio del suceso y la creación de un "Registro de verificación de identidad". Esto debe ser acompañado de potenciar los planes de intervención social con impacto en seguridad ciudadana a gran escala, como por ejemplo el Plan La Legua que ya se está llevando a cabo.

Desde el punto de vista legislativo, existe una agenda con iniciativas relevantes en fase final en el Congreso. Ejemplo de ello son los proyectos de ley sobre Medidas Alternativas³

e Indulto Sustitutivo y otras 14 iniciativas legales vinculadas directa o indirectamente al tema⁴. Clave resultará para el éxito de estas iniciativas el que se evalúen constantemente.

Chile ha hecho un gran esfuerzo por aumentar el gasto público y privado en materia de seguridad ciudadana. De esta forma, desde el año 2000, se ha duplicado el gasto del sector público, pasando de US\$ 1.062 millones, a cerca de US\$ 2.000 millones en la actualidad. En tanto, el gasto privado pasó de US\$ 677 millones a más de US\$ 1.500 millones. Así, hoy el costo directo de la delincuencia impuesto al país supera largamente los US\$ 3.000

millones⁵. Lo anterior, implica que el actual Gobierno cuenta con una gran cantidad de recursos que permiten implementar sus políticas, pero también debe demostrar buenas cifras que justifiquen el uso eficiente de estos recursos en la políticas que se están llevando a cabo a lo largo de todo Chile.

Por último, existen dos aspectos de la agenda de combate a la delincuencia que se deben profundizar. En primer lugar, en descentralización y particularización frente al combate a la delincuencia. Así, por ejemplo, desde la perspectiva de la persecución criminal, serían deseables reuniones periódicas del alcalde, el jefe de seguridad comunal, el fiscal local y el comisario o subcomisario de la zona, para analizar en detalle la evolución de cada delito por cuadra,

con mapas georreferenciados, y así adoptar las medidas del caso.

En segundo lugar, se requiere una reforma integral a la labor policial, descentralizando a nivel local el establecimiento de metas y plazos de reducción de delitos específicos, en plazos específicos, Ello iría vinculado a evaluaciones por desempeño a policías.

CONCLUSIÓN

Nunca un alza en materia de indicadores de delincuencia -por muy particular que sea- es una buena noticia. Si bien se trata de una alerta potente para las autoridades encargadas de la seguridad pública, se debe ser cauteloso a la hora de sacar conclusiones extensivas. Aún deben analizarse las próximas mediciones, que confirmarán si se

trata o no de una nueva tendencia al alza.

El Gobierno debe estar alerta a este tipo de señales, profundizando las medidas que se están tomando desde 2010. En particular, deben agilizarse las iniciativas legales en discusión -en especial aquellas sobre medidas alternativas-, las concesiones de cárceles y otros planes de intervención social con impacto en seguridad ciudadana a gran escala, intentando socializar las consecuencias de los delitos entre los posibles infractores.

Aún así debe trabajarse en la descentralización y particularización en el ataque a la delincuencia por comuna y por delito, sin dejar la reforma integral a la labor policial, vinculada a evaluaciones de desempeño. **LyD**

Debe trabajarse en la descentralización y particularización en el ataque a la delincuencia por comuna y por delito, sin dejar la reforma integral a la labor policial, vinculada a evaluaciones de desempeño.



Foto: Carabineros de Chile

- 1 Ver, por ejemplo, James Lynch (2007): "Crime in International Perspective" en James Q. Wilson y Joan Petersilia: *Crime. Public Policies for Crime Control* (California: ICS).
- 2 Ver Jan Van Dijk, John Van Kesteren y Paul Smith (2007): "Criminal Victimization in International Perspective: Key Findings from the 2004-2005 ICVS and EU ICS" (UN).
- 3 El proyecto de ley (Boletín 5838-07) Se encuentra muy avanzado en su tramitación legislativa en el Senado, donde ha generado alto consenso dentro de los parlamentarios. Recientemente el Ministerio realizó un seminario donde expusieron expertos nacionales y extranjeros sobre el tema.
- 4 Entre ellos destacan la creación del Registro Público de Prófugos; Registro Público en Internet de Pedófilos, endurecimiento de penas por manejo en estado de ebriedad, y el proyecto para endurecer las penas por maltrato de obra a Carabineros y PDI.
- 5 Libertad y Desarrollo: "Costo de la Delincuencia: US\$ 3.268 Millones en 2008", Temas Públicos N° 938, 9 de octubre de 2009. Arzola, María Elena y García, José Francisco (2008): "El Costo de la Delincuencia en Chile 2000-2007", Libertad y Desarrollo Serie Informe Político N° 106.



“Todavía somos un país con una **centralización importante en materia de seguridad**”

La actual Directora Ejecutiva de la Fundación Paz Ciudadana y ex Subsecretaria de Carabineros cree que es relevante que profesionales altamente capacitados trabajen a nivel local desarrollando políticas públicas en materia de seguridad ciudadana e indica que la mayor parte de los delitos son cometidos por un núcleo duro de delincuentes que pasan una y otra vez por el sistema. Tras la entrega de los resultados de la última Encuesta de Victimización Paz Ciudadana-Adimark respondió a las preguntas de la Revista Libertad y Desarrollo.

¿Qué conclusiones se pueden extraer de los resultados de la última encuesta Paz Ciudadana-Adimark?

Lo primero que hay que decir es que es una encuesta telefónica que ya tiene 10 años de existencia, que tiene una representatividad nacional y que nos permite por lo mismo generar una comparación histórica no menor durante los últimos años en la que se evidencia que hay un quiebre importante el año 2007 en términos de baja: estábamos en

41% de hogares víctimas, siempre hablando de delitos contra la propiedad, y pasamos a 38%, lo que se mantuvo en torno a ese número hasta el año pasado que bajamos a un 36% y luego a un 33%, el quiebre más grande de baja.

La última medición lo que hace es volver al parámetro anterior que se había registrado en 2007, que es el 37,9%. Ahora, en relación al 33% anterior, obviamente es llamativo

considerando que son 5 puntos de aumento, pero hay que recordar que 38% era lo que habíamos registrado en los últimos años. Por esto, aquí la pregunta, más que el aumento, es qué generó el quiebre del año pasado, qué generó la baja a 33%. Yo creo que hoy día esa es la pregunta más desafiante que tenemos.

En ese sentido, hay información adicional que uno puede ir complementando, que es

entender si todos crecemos o bajamos en la misma intensidad. Otra información valiosa que tiene este instrumento es decir que los que más crecen son las regiones, más que Santiago, y lo hacen en todas las áreas socioeconómicas, pero principalmente en el sector medio-bajo y, en el ámbito de la Región Metropolitana, hay una zona donde hay mayor concentración de victimización y de re-victimización, que es la zona sur poniente (Maipú, San Bernardo, El Bosque, Lo Espejo, Cerrillos y Pedro Aguirre Cerda).

En ese sentido, lo que preocupa es que justamente es una zona más deprimida económicamente, lo que genera obviamente menos herramientas y menos medios para hacer frente a un tema como es la inseguridad.

Hay también un aumento en el estudio del temor, pero mucho menor que la victimización, pasamos de un 12% a 13%, aunque todavía nos estamos moviendo en niveles bajos en comparación a otros años.

Esta es una foto, una radiografía que nos da luces para entender que el problema delictivo es un tema bastante concentrado hoy en el país. En términos territoriales, así como tenemos una zona sur poniente donde se concentra, tenemos perfiles de hogares también que concentran más víctimas; sabemos que el 24% de los hogares concentra el 87% de los delitos y eso muestra que no hay una distribución aleatoria en el territorio. Hoy, el desafío es llegar con las políticas públicas en seguridad a estos lugares y no a otros.

El temor también está bastante concentrado en personas víctimas, en mujeres, en personas mayores de edad, nivel socioeconómico bajo, es decir, en general esta foto nos da luces de cómo mantener o cambiar las políticas públicas de seguridad.

PRINCIPALES DESAFÍOS SEGÚN JAVIERA BLANCO

PREVENCIÓN: El abordaje barrial de los temas con una adecuada y oportuna evaluación de estas intervenciones y el de los temas de jóvenes infractores o con conductas desadaptativas en el tema local.

PERSECUCIÓN CRIMINAL / NIVEL POLICIAL: Generar análisis criminal. Una policía orientada al problema delictivo, a la persecución penal inteligente, por ejemplo, manejando de una manera distinta las horas/hombre.

PENAS: Principalmente abordar una reforma integral que nos permita enfatizar las penas que se cumplan en medio libre con un adecuado sistema de monitoreo y control y, sobre todo, en generar mecanismos de rehabilitación eficiente.

Hay un elemento adicional que se hace necesario a la hora de tomar esas decisiones, que son las evaluaciones de los programas.

¿Cuál es tu evaluación a un año de la implementación del plan de seguridad pública del actual Gobierno (Chile Seguro)?

Es difícil saberlo porque todavía, aunque la gente sienta que un año es mucho, para efectos de impacto es difícil poder hacer evaluaciones en tan corto plazo. Hay que pensar que muchos de los programas se implementan después de marzo de 2010, por lo tanto, es un poco pronto para decidir si hay una buena o mala evaluación.

Lo que hay, y uno lo puede decir, son buenas decisiones. Por ejemplo, a mí me parece adecuada toda la mirada barrial que se le está dando actualmente al problema. Es bastante interesante el énfasis que se le ha puesto al tema penitenciario. Creo que ahí hay un nicho en el que se puede ahondar y en el que la Fundación ha venido trabajando ya hace un buen tiempo.

Hay una serie de conceptos que se han instalado en la sociedad chilena, como la

"puerta giratoria" ¿Cómo está la parte judicial en el combate de la delincuencia?

La puerta giratoria no se da en el entendido del común de la gente, en que la persona comete delitos y vuelve a salir para cometer más delitos. La puerta giratoria se ve al final del camino, en el sentido de que la persona comete delito, puede ser aprendida, formalizada y condenada, pasar hasta un tiempo en la cárcel, pero sale de la cárcel y vuelve a delinquir. Esa es la puerta giratoria o técnicamente reincidencia.

Eso es lo que hace pensar que el énfasis debe estar puesto en lograr que las personas que se involucran en actividades delictivas tengan en algún minuto una oportunidad real de romper este círculo. En ese sentido, hay que distinguir en lo que es el grueso de la población infractora, donde el 80% es una población más bien de mediana y baja complejidad, por lo tanto, no deberían ser tan difíciles de rescatar. Ese 80% es responsable de una parte menor de los delitos. La mayor parte de los delitos son cometidos por un 20% prolífico y ese 20% prolífico es de un nivel de complejidad mucho más alto. Estamos hablando de personas con fuerte consumo, problemas

de salud mental, familias disfuncionales, bajos niveles de preparación para el trabajo, desertores escolares tempranos, que nos hacen analizar una oferta especializada, quizás en un mayor plazo para pensar en cambios conductuales evidentes, pero que hay que insistir en ese grupo porque ese es que más determina la mayor cantidad de hechos que hoy ocurren en materia delictiva.

Los niveles de paso una y otra vez por el sistema nos hablan de que la delincuencia, al igual que todo orden de cosas en materia de seguridad, también está concentrada. Esto nos habla de que hoy las políticas de rehabilitación también son un desafío para el país.

¿Cómo evalúas el avance en materia de descentralización del combate a la delincuencia?

Todavía somos un país con una centralización importante en materia de seguridad. Eso también está explicado porque a nivel comunal hay un desafío en términos de capacidades instaladas. Creo que hay que trabajar en contar con profesionales altamente capacitados en el territorio que permitan hacerse cargo, no sólo del diseño de políticas de seguridad, sino de la implementación en el mediano y largo plazo.

Lo anterior se fomenta a través de una línea de formación de profesionales. Es un llamado para la academia porque hoy escasamente encontramos preparaciones en estas materias más allá de las profesiones tradicionales, pero que no preparan especialmente para las materias de seguridad.

Creo que también, por el lado público, en la mirada del Estado lo que ha habido es poca constancia e inconsistencia en lo que son los

flujos financieros, lo que hace muchas veces difícil, sobre todo para los municipios más pobres, el poder mantener un personal y atraerlo de manera permanente porque muchas veces los proyectos están pensados a 10 meses plazo, entonces son periodos que se quiebran financieramente con una periodicidad muy alta y hacen que obviamente para el profesional más calificado deje de ser una alternativa muy atractiva.

Yo creo que pasa por formar, por atraer más al profesional al mundo local, pero también por generar incentivos para que eso ocurra y en esos incentivos hay un lado bastante importante que tiene que venir del aparato público.

Con el aumento significativo de recursos públicos para el combate a la delincuencia que hemos tenido en los últimos años ¿Cuál es tu evaluación respecto a la eficiencia de estos recursos?

Todavía falta hacer un análisis de esa naturaleza para poder comprobar la eficiencia de los recursos gastados en seguridad. Habría que tener evaluados todos y cada uno de los proyectos que tenemos en materia de seguridad y eso no existe, por lo tanto no sabría decir si hay más eficiencia.

Hay una mejor cobertura, ha habido más programas, pero no podría decir en términos de impacto cuántos y cuáles de ellos han contribuido a esa baja que hubo el año pasado o eventualmente al alza que registramos ahora.

Una evaluación presupuestaria en términos de impacto es un área faltante en términos de las políticas de seguridad.

La seguridad privada crece día a día. ¿Qué opinas de este fenómeno y hasta dónde es legítimo que los ciudadanos asuman el costo de un servicio, como

es el orden público, que es propio del Estado?

Es súper legítimo que exista el área de la seguridad privada. Si hay un servicio que se presta y alguien que lo quiere tomar y pagar por él, no se puede coartar ese derecho.

Lo que sí me parece es que todas las áreas sensibles, en el sentido de entrar en contacto o abordar un bien público importante para la sociedad, que mueve un volumen de dinero no menor, tiene que tener una regulación estatal de alguna naturaleza.

Hoy en día la seguridad privada ha crecido de una manera exorbitante y tiene una responsabilidad, junto a la seguridad pública, en disminuir efectivamente la delincuencia. Para eso, lo que necesitamos es regulación, asegurar ciertos niveles de seguridad del servicio e información pública de manera que los usuarios puedan tomar sus decisiones con la información necesaria. Si yo contrato un sistema de alarma, lo hago sabiendo en cuánto me impacta en términos de seguridad, cuántos delitos yo puedo inhibir a partir de la colocación de una alarma, porque si es así, sé que los \$ 15.000 o \$20.000 mensuales que yo pago van porque el costo-beneficio de eso es mucho mayor. Es decir, los \$ 20.000 se justifican plenamente porque yo estoy eliminando la posibilidad de sufrir un robo mucho más cuantioso, pero esa información no está. La calidad del servicio es bastante dispareja y eso pasa por una mejor regulación del área.

Hace ya un tiempo hay una ley de seguridad privada que se discute en el Congreso y creo que es hora de darle algún tipo de prioridad y urgencia. Eventualmente es posible pensar en una Superintendencia de Seguridad Privada como la que existe para otras áreas sensibles como son valores y seguros y bancos e instituciones financieras, perfectamente. **LyD**

Ambientalistas de Estados Unidos **versus** los pobres de Chile

Grupos ambientalistas norteamericanos hacen lobby para bloquear el desarrollo energético chileno



Mary Anastasia O'Grady

El Presidente chileno Sebastián Piñera afirma que generando altos niveles de crecimiento, la política económica de su Gobierno puede llevar al país por la senda de convertirse en una nación desarrollada en el plazo de una década. Esto sería una excelente noticia para los millones de chilenos que todavía viven bajo la línea de pobreza. Pero es probable que esto no ocurra si los ambientalistas se salen con la suya al bloquear el desarrollo energético chileno.

La más reciente causa ambientalista en Chile apunta a una propuesta de planta hidroeléctrica en el sur de la Patagonia. En el mes de mayo, el organismo regulador chileno encargado de aprobar dichos proyectos dio luz verde para construir cinco embalses que producirán energía. De inmediato, los grupos ambientalistas organizaron marchas de protesta en Santiago y amenazaron con juicios que podrían entrapar el proyecto por años. Las cifras del Presidente Piñera en la encuesta de opinión también han sido blanco de la propaganda ambientalista, acusando al Gobierno de perjudicar la belleza natural.

Chile es un pequeño país, pero este caso merece una atención especial, puesto que representa un microcosmos de una batalla global entre las élites cómodas, que han decidido que ya hay suficiente progreso, y aquellos que luchan por el crecimiento económico y la superación de la pobreza. Armados con abultadas billeteras, estos grupos internacionales "ambientalistas" han puesto a la defensiva a quienes

combaten la pobreza. La izquierda dura chilena también se ha metido en la pelea, al considerar el asunto de las represas como una oportunidad para debilitar el Gobierno de centroderecha.

Durante una visita el mes pasado a las oficinas del Wall Street Journal en Nueva York, el entonces Ministro chileno de Minería y Energía, Laurence Golborne, parecía genuinamente sorprendido con el alto nivel de oposición pública al proyecto. El país importa un 70% de su energía y las fuentes son caras y poco confiables. Si Chile desea crecer lo suficientemente rápido como para derrotar las cifras de pobreza, necesitará fuentes de energía más diversificadas y con precios más competitivos. El Ministro Golborne advirtió que las plantas nucleares no están sobre la mesa debido a la actividad sísmica, pero el agua es abundante en el sur de Chile y además es una fuente de energía limpia, renovable y no contaminante.

De acuerdo al centro de estudios e investigación chileno Libertad y Desarrollo (LyD), el proyecto de embalses llamado HidroAysén promete generar más del 30% de la energía que Chile consume actualmente. "Es grande, pero también es muy eficiente" me contó el mes pasado Susana Jiménez, Economista Senior de LyD, durante una entrevista telefónica desde Santiago. Las represas de la Patagonia inundarán apenas 5.910 hectáreas de tierra y producirán 18.400 gigawatts por hora. Esta es una relación terreno-energía impresionante si se compara, por ejemplo, con el nuevo

*El presente artículo fue publicado el 11 de julio del presente año en la sección The Americas del Wall Street Journal.

Reprinted from The Wall Street Journal © 2011 Dow Jones & Company. All rights reserved.



Mary O' Grady durante su visita a Chile en diciembre pasado junto a Carlos F. Cáceres, Hernán Büchi y Luis Larrain.

Chile es un pequeño país, pero este caso merece una atención especial, puesto que representa un microcosmos de una batalla global entre las élites cómodas, que han decidido que ya hay suficiente progreso, y aquellos que luchan por el crecimiento económico y la superación de la pobreza. Armados con abultadas billeteras, estos grupos internacionales "ambientalistas" han puesto a la defensiva a quienes combaten la pobreza. La izquierda dura chilena también se ha metido en la pelea, al considerar el asunto de las represas como una oportunidad para debilitar el Gobierno de centroderecha.

proyecto del embalse brasileño, Belo Monte, que inundará 51.600 hectáreas y producirá 28.000 gigawatts por hora. El área afectada por los embalses tiene una población local de 13 familias, no habrá grandes comunidades desplazadas. El consorcio de electricidad también ha prometido establecer un área de conservación de 11.500 hectáreas y reforestar 4.500 hectáreas con especies nativas.

Es posible que las empresas eléctricas detrás de HidroAysén tengan los datos de su parte, pero no han logrado tomar en serio a los extremistas ambientales que le han otorgado una alta prioridad al fracaso de este proyecto durante los últimos cuatro años. Uno de estos grupos es la Red Internacional de Ríos (IRN, por su sigla en inglés), una organización no gubernamental de Berkeley con sede en California, que trabaja en todo el mundo contra la construcción de represas en los ríos para producir energía hidroeléctrica. En el año 2007 le dijo al diario La Nación que recurriría a las grandes fundaciones en busca de dinero para combatir el proyecto. Su abogado también prometió una táctica

conocida, demonizando a aquellos que apoyen la represa: "La economía chilena depende fuertemente de su imagen en el extranjero, y creemos que la imagen de HidroAysén se asociará a una política energética primitiva y una imagen de la Patagonia degradándose, la cual es un símbolo mundial de la naturaleza".

Y efectivamente, los chilenos han sido invadidos por propagandas anti represa que muestran torres de transmisión sobrepuestas en fotografías del parque nacional de la Patagonia, aun cuando la planta hidroeléctrica se encuentra 300 kilómetros al norte de ese parque.

Peter Hartmann, un ecologista que vive en Chile, reveló en enero que el esfuerzo por detener HidroAysén ha recibido "ayuda y financiamiento" del IRN de Berkeley, Greenpeace España y el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales de América (NRDC, por su sigla en inglés) y la Tides Foundation, entre otros grupos. En el 2008, Robert Kennedy Jr., abogado del NRDC, se reunió con la ex Presidenta de Chile Michelle

Bachelet, con el objeto de hacer lobby en contra de HidroAysén. Más recientemente, le escribió una carta del mismo tenor al Presidente Piñera.

Los informes de prensa indican que los radicales ambientalistas también reciben dinero de adinerados miembros del jet-set, que son dueños de grandes extensiones de terreno en la Patagonia destinadas a reservas privadas de caza y pesca. Con cerros de dinero y aptitudes bien asentadas para combatir el desarrollo, las ONG resultan formidables. No está claro si el Presidente Piñera está a la altura del desafío. Bajo la presión ambientalista, ya canceló la construcción de una planta eléctrica a carbón que había sorteado los obstáculos regulatorios correspondientes.

Si el proyecto de represa es derrotado, las élites ambientalistas mantendrán las extensiones deshabitadas y salvajes de la Patagonia como su refugio personal. El que millones de chilenos pierdan la oportunidad de escapar de la pobreza sin duda no les quitará mucho el sueño. **LyD**

Subsidios e indígenas: Mayor dependencia

Los hogares indígenas son más dependientes que los no indígenas de las transferencias monetarias, en el sentido que el ingreso medio de los hogares por concepto de subsidios representa una mayor proporción del ingreso autónomo promedio. Esto se da especialmente para las familias que pertenecen al Programa Chile Solidario.

Según datos del Censo 2002, sólo un 4,6% de la población nacional declara pertenecer a pueblos indígenas originarios. Sin embargo, de acuerdo a la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, (CASEN) 2009 la población que se autoidentifica como perteneciente a los llamados "pueblos indígenas" alcanza a 1.188.340 personas, es decir, un 7% del total de la población chilena.

Como también sucede en otros países del mundo, un importante porcentaje de la población indígena vive en situación de pobreza y exclusión social. De hecho, la CASEN 2009 reveló enormes desigualdades en ámbitos de ingresos y educación en los pueblos indígenas.

Si se comparan los niveles de pobreza a nivel nacional entre aquella población que declaró pertenecer a alguno de los pueblos indígenas y la que declaró no pertenecer a ellos, se puede apreciar cómo los niveles de pobreza entre los indígenas superan en 5 puntos porcentuales los niveles de pobreza entre la población no indígena (19,9% y 14,8% respectivamente).

La diferencia se hace aún más evidente cuando se observa la situación de indigencia de estas dos poblaciones. La indigencia o extrema pobreza entre la población indígena es de 5,7% y entre la población no indígena, de 3,6%. Esta situación se ha ido agravando, ya que en la CASEN 2006 la indigencia en la población indígena era de 4,7%, aumentando en un punto porcentual en el trienio 2006-2009.

No obstante, cuando se compara en años la Encuesta CASEN demuestra que la pobreza ha disminuido más rápido entre la población indígena, situación que disminuye las brechas con respecto a la población chilena desde un 11,3% en 2003 a 5,1% en 2009; los mismos datos señalan que ello ha sido a costa del aumento de la migración a las grandes ciudades, generalmente fuera de sus territorios, fenómeno que hasta ahora tiene un efecto negativo sobre la mantención de la cultura y principalmente de la lengua.

En cuanto a la distribución de la población perteneciente a pueblos originarios por región del país puede apreciarse que el 63,1% reside en sólo tres regiones del país: La Araucanía, Metropolitana y de Los Lagos. La Región Metropolitana concentra el 24% del total de

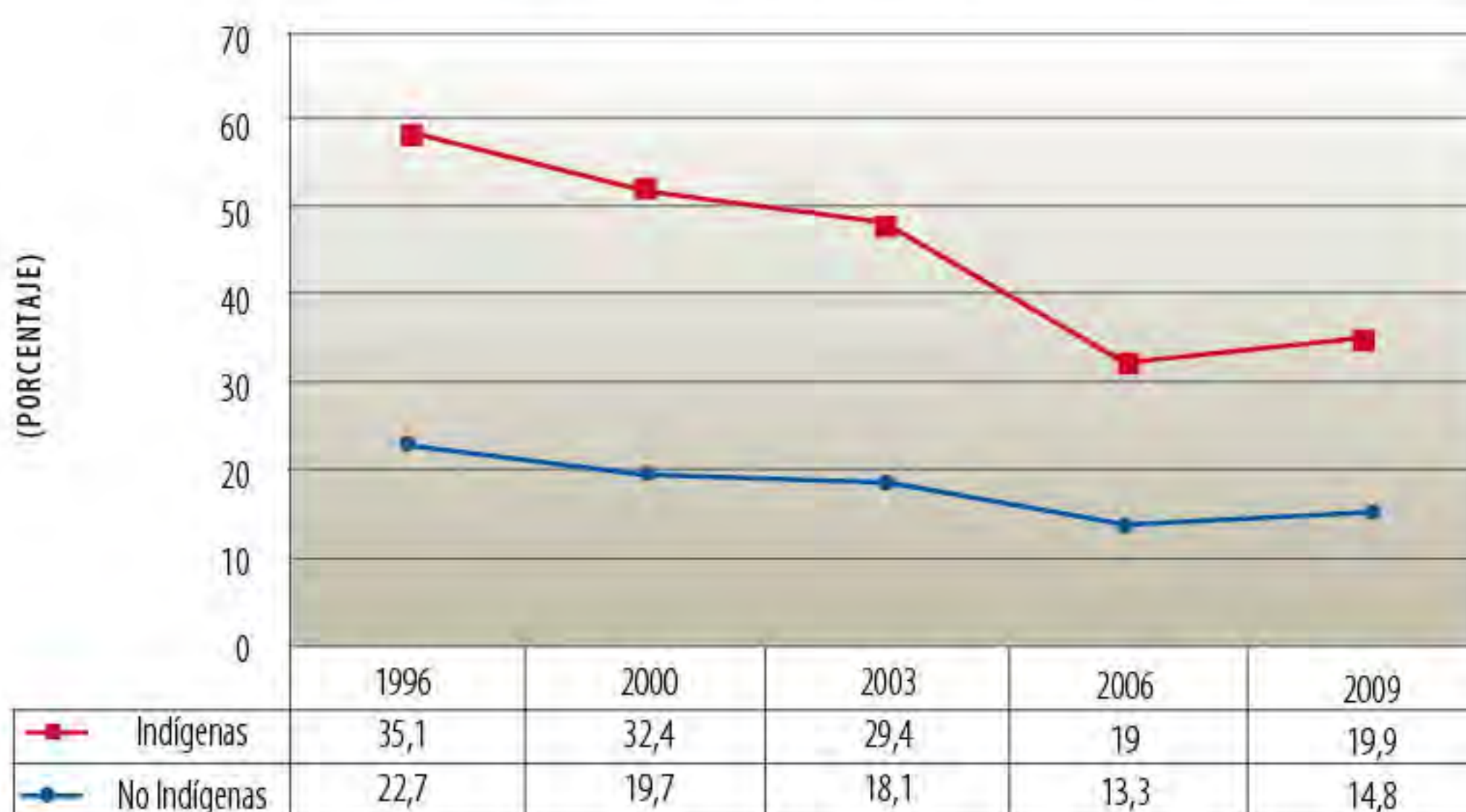
población indígena del país, en su mayoría rapa nui y mapuche.

Ante la evidencia de los datos, el Estado ha aplicado políticas de desarrollo, focalizando esfuerzos principalmente en las áreas que concentran a esta población. De esta forma, han sido mayormente beneficiadas de los programas de transferencias.

Cuando incluimos los demás subsidios que recibe un hogar a nivel nacional, los subsidios monetarios representan el 5% del ingreso autónomo de los hogares indígenas. Este porcentaje es de sólo 2% para los hogares no indígenas. Tomando sólo a los hogares del 40% más pobre de la población, estos valores suben a 20% para hogares indígenas y 14% para hogares no indígenas.

Gráfico N° 1

POBREZA EN LA POBLACIÓN INDÍGENA Y NO INDÍGENA



Fuente: CASEN 2009

Cuadro N° 1
SUBSIDIOS POBLACIÓN INDÍGENA / NO INDÍGENA

	POBLACIÓN INDÍGENA			POBLACIÓN NO INDÍGENA		
	SUBSIDIOS PROMEDIO HOGAR *	INGRESO AUTÓNOMO PROMEDIO HOGARES **	ING.SUB / ING.AUT	SUBSIDIOS PROMEDIO HOGAR	INGRESO AUTÓNOMO PROMEDIO HOGARES	ING.SUB / ING.AUT
Tarapacá	30.482	415.034	7%	15.939	680.943	2%
Antofagasta	18.939	892.597	2%	15.737	850.595	2%
Atacama	17.875	651.780	3%	16.708	640.142	3%
Coquimbo	17.469	533.186	3%	19.076	524.276	4%
Valparaíso	19.532	459.587	4%	18.082	624.148	3%
O'Higgins	21.261	589.875	4%	19.574	560.055	3%
Maule	21.278	492.248	4%	23.980	495.780	5%
Bío Bío	29.740	459.587	6%	24.761	519.621	5%
La Araucanía	43.127	280.787	15%	28.258	487.341	6%
Los Lagos	34.827	464.233	8%	30.436	573.994	5%
Aysén	21.684	615.978	4%	20.451	772.067	3%
Magallanes	11.757	537.408	2%	12.715	808.727	2%
Metropolitana	14.680	778.774	2%	12.642	1.004.832	1%
Los Ríos	33.648	297.657	11%	26.700	475.758	6%
Arica	16.557	704.992	2%	15.768	724.275	2%

Fuente: CASEN 2009

* Ingreso de los siguientes subsidios: Pensión Básica Solidaria de Vejez y de Invalidez, Aporte Previsional Solidario de Vejez e Invalidez, Subsidio Único Familiar, Subsidio a la Discapacidad Mental, Bonos de Protección Familiar y Bono de Egreso de Chile Solidario, Bonos Extraordinarios de Apoyo a la Familia (Marzo) / (Agosto), Subsidio al Pago del Consumo de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas (SAP), Subsidio Eléctrico, Subsidio de Cesantía y Asignación Familiar.

** Ingreso autónomo corresponde a aquél por concepto de sueldos y salarios, ganancias provenientes del trabajo independiente, autoprovisión de bienes producidos por el hogar, bonificaciones, gratificaciones, rentas, intereses, así como jubilaciones.

Tomando los datos regionales, se obtiene que las regiones en que las familias indígenas son más dependientes de subsidios son las de La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Tarapacá y Bío Bío.

Como se ha señalado, la población indígena del país no sólo experimenta mayores niveles de pobreza que la población no indígena. También entre quienes no son pobres se dan diferencias de ingreso según pertenezcan o no a algún grupo étnico.

Los hogares indígenas reciben un ingreso promedio mensual (pesos del 2009) menor a los de los hogares no indígenas. En cambio, reciben mayores ingresos a través de subsidios de parte del Estado.

Los hogares indígenas son más dependientes que los no indígenas de las transferencias monetarias, en el sentido que el ingreso medio de los hogares por concepto de subsidios representa una mayor proporción del ingreso autónomo promedio. Esto se da especialmente para las familias que pertenecen al Programa Chile Solidario.

El ingreso medio por concepto de subsidio que reciben las familias indígenas que participan en Chile Solidario corresponde al 14% de su ingreso autónomo, mientras que las familias no indígenas a un 9%.

COMENTARIO FINAL

Es fundamental que los pueblos indígenas cuenten con las herramientas necesarias para poder superar su condición social respetando

Cuadro N° 2
INGRESOS INDÍGENAS / NO INDÍGENAS

	INGRESO DE SUBSIDIOS*	INGRESO AUTÓNOMO**
Indígenas	27.633	514.839
No indígenas	18.180	750.768

Fuente: CASEN 2009

* Ingreso de los siguientes subsidios: Pensión Básica Solidaria de Vejez y de Invalidez, Aporte Previsional Solidario de Vejez e Invalidez, Subsidio Único Familiar, Subsidio a la Discapacidad Mental, Bonos de Protección Familiar y Bono de Egreso de Chile Solidario, Bonos Extraordinarios de Apoyo a la Familia (Marzo) / (Agosto), Subsidio al Pago del Consumo de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas (SAP), Subsidio Eléctrico, Subsidio de Cesantía y Asignación Familiar.

** Ingreso autónomo corresponde a aquél por concepto de sueldos y salarios, ganancias provenientes del trabajo independiente, autoprovisión de bienes producidos por el hogar, bonificaciones, gratificaciones, rentas, intereses, así como jubilaciones.

su multiculturalidad. En ese sentido, es necesario priorizar adecuadamente el gasto social. Durante años este fue mayormente entregado al Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, sin contar con apoyo para trabajar los predios y muchos optaban por arrendarlos a privados, a pesar de estar prohibido por la Ley Indígena. De allí que el nuevo Programa de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI) implementados durante la presente administración y gestionado por CONADI, que entrega asistencia técnica e inversión con la asesoría de INDAP, es una excelente iniciativa a destacar.

Pero a su vez, también es necesario recalcar la necesidad de que existan políticas públicas descentralizadas en el tema indígena. La mayoría de los beneficios han sido históricamente entregados en las zonas rurales, mientras que la mayor parte de los mapuches viven en las zonas urbanas (70%).

El desafío en materia de políticas públicas es grande, pero éste se debe hacer promoviendo la integración a la sociedad, sin perder su cultura.

**Documento elaborado por Claudia Hernández, Investigadora del Programa Sociedad y Política de Libertad y Desarrollo. LyD*



ZONA EURO: Serios y duraderos problemas financieros

Francisco Garcés
Director del Centro de Economía Internacional

En las últimas semanas observamos con preocupación cómo se intensificaba el riesgo para la economía griega y las posibilidades de contagio hacia otras economías miembros de la Unión Monetaria Europea donde prevalece la moneda única, el euro, empezando a temerse por su permanencia.

La Unión Monetaria Europea ha sido un gran esfuerzo de constructivismo y voluntarismo de los políticos europeos, donde se ha descuidado su coherencia financiera. Uno de los aspectos más visibles de esta incoherencia ha sido la permisividad, en que incluso incurrió Alemania durante el Gobierno socialista respecto a los desequilibrios fiscales y al aumento de la deuda pública, simultáneamente con tener una moneda, un Banco Central y una política monetaria únicas, con tasa de interés de referencia homogénea para todos los participantes de la Unión.

Junto a lo anterior, los gobiernos socialistas y social demócratas desarrollaron generosas políticas de bienestar social, profundizándolas recientemente, aún cuando el ciclo económico desaconsejaba esa generosidad de los políticos europeos, tales fueron los casos más visibles y extremos de España, Portugal y Grecia.

A lo anterior se agrega la heterogeneidad que surgió como consecuencia de lo anterior, en cuanto a desequilibrios macroeconómicos, productividad y competitividad de los miembros de la Unión Monetaria. El ejemplo más claro es la comparación entre Grecia y Alemania, donde el *gap* de productividad y competitividad que, al inicio de la Unión era significativo, se agravó enormemente con posterioridad.

Adicionalmente, dentro de la Unión Monetaria ha habido poco control respecto a las estadísticas fiscales de gasto público y deuda y a las estadísticas externas de desequilibrios en la cuenta corriente de balanza de pagos, que es un indicador del exceso de gasto. El Acuerdo de Masstricht, respecto a límites de déficit fiscal y endeudamiento, fue vulnerado incluso por las economías centrales de la Unión, vale decir, Alemania y Francia, que en algún momento pensaron en flexibilizarlo, generando un lamentable "efecto de demostración" hacia los miembros más marginales y más débiles y vulnerables económicamente.

Como consecuencia de lo anterior, se generaron crecientes desequilibrios en el sector público y en algunos casos, descontrol en materia crediticia, que antes de la crisis financiera global del 2007-2008 permanecieron encubiertos, pero que afloraron con fuerza por la retracción de la liquidez, propia del momento cíclico de aguda baja en la actividad económica y del brusco aumento del riesgo percibido.

La situación de Grecia es fruto de todos los elementos descritos, pero en un carácter extremo, en que no sólo ha habido abuso del gasto público y del endeudamiento y caída fuerte de la productividad y competitividad, sino también corrupción y adulteración reiterada de la información económica relevante, concernientes a la viabilidad de su permanencia sostenible en la Unión Monetaria.

Como si todo lo anterior no fuera suficiente, en términos de desequilibrio económico y financiero y debilitamiento político, ahora los políticos europeos intentan resolver los episodios

ANÁLISIS

críticos que se van produciendo entre los miembros más débiles de la Unión Monetaria y los que más han abusado del Estado de Bienestar, del gasto público y del endeudamiento soberano con una visión política de corto plazo, sin atender, particularmente, a la sensibilidad del mercado financiero o a los principios económicos válidos. De ahí que surjan conflictos societarios dentro de la Unión y demoras en las decisiones incompatibles con las exigencias de los mercados y las soluciones son, como se ha podido comprobar, lentas, parciales, inadecuadas y en definitiva, de corto plazo, y en lenguaje vulgar, "de parche".

Este estilo de soluciones, debido a la dinámica financiera muy rápida y a la exigencia o presión de los mercados que observan una continua falta de credibilidad y riesgo creciente, agrava rápidamente la situación financiera de las economías con problemas vía tasa de interés o altos spreads de riesgo y descenso en las clasificaciones de deuda, que en el caso de Grecia, llegan al nivel de bonos basura.

Adicionalmente, surge la potencialidad del contagio hacia otras economías relativamente débiles, como es el caso de España e Italia, ante eventos de fragilidad política.

Estas complejas experiencias de la integración europea son útiles y válidas para América Latina, así como también puede ser útil y oportuna la experiencia de América Latina para Europa en cuanto a soluciones de crisis de deuda de los años 80.

Actualmente, Grecia, que es el caso extremo dentro de la Unión Monetaria Europea, acaba de lograr un segundo rescate, con un paquete de recursos de apoyo por 109.000 millones de euros y se le autorizó desembolsar 12.000 millones de euros para pagar un vencimiento en julio y evitar el default desordenado. Del primer paquete de rescate, aproximadamente similar al actual, Grecia alcanzó a desembolsar 65.000 millones de euros, de modo que el total de recursos disponible para Grecia, es de 174 mil millones de euros para el período 2010-2014. La tasa de interés será de 3,5% y el período de gracia de 10 años y los vencimientos entre 15 y 30 años.

Este segundo paquete de recursos para Grecia tendría un aporte "voluntario" de los acreedores privados, principalmente bancos

e instituciones financieras, incluido el Banco Central Europeo, que han sido forzados a hacer concesiones en créditos vigentes a Grecia, en unos 50 mil millones de euros. Esta operación de cooperación se llama "*Private Sector Involvement*" y el aporte puede ser entregado a través de: rollover, cambio de deuda o recompras de deuda. Al Fondo de Estabilización Europeo (EFSF) se le ha autorizado también para otorgar "préstamos de precaución" a las economías soberanas que no están en un programa formal de ajuste.

Este segundo rescate está inserto en una estrategia de mediano plazo que permitió a Grecia permanecer en la Unión Monetaria, haciendo un esfuerzo de ajuste junto a un moderado recorte de deuda y pueda mantenerse sin caer en moratoria o cesación de pagos hasta el momento y en el futuro, en que pueda abordarse una reestructuración profunda de entre 40 y 80%.

Actualmente, los beneficios acordados, para Grecia, de *default* selectivo equivalen a un recorte de un 20%, que es insuficiente para restablecer la solvencia a Grecia, más aún cuando el crecimiento económico es muy débil y no permite generar recursos excedentes, para el pago de la deuda externa.

En consecuencia, el segundo paquete de rescate no es suficiente para resolver el problema de endeudamiento excesivo de Grecia y probablemente se esperará una oportunidad para dar una solución definitiva. Mientras eso no ocurra, es necesario seguir entregando recursos y financiando a Grecia a tasas concesionales y plazos extensos.

El Fondo Monetario contribuirá al nuevo paquete de rescate con 36 mil millones de euros y el Fondo de Estabilización Europeo (EFSF) con 98 mil millones de euros, de los cuales 73 mil millones de euros son de financiamiento oficial y 25 mil millones de euros para recompras de deuda.

En suma, el corolario final, por ahora, es paciencia y continua transferencia de recursos de las economías más fuertes de la Unión a las más frágiles, en aras de la supervivencia del proyecto de Unión Monetaria Europea. Simultáneamente, deben hacerse las reformas necesarias y disciplinarias que den coherencia a la Unión Monetaria. **LyD**

Bono AUGE: Caída en las listas de espera para atenciones

Pese a las críticas iniciales a este sistema, que permite desviar atenciones de salud a centros médicos privados, el Bono AUGE y otras medidas adicionales de gestión han permitido bajar en más de la mitad las listas de espera de las patologías AUGE y se espera que se regularicen en lo que queda de este año. Ahora queda implementar con fuerza el programa que busca mejorar los tiempos de espera también en las enfermedades "no garantizadas".

Frente a la falta de capacidad del sistema público de salud para atender las demandas de sus usuarios, el Gobierno ha impulsado medidas que permiten que personas pertenecientes a FONASA se atiendan en centros privados en caso de que no consigan un cupo en hospitales públicos. Esto se enmarca dentro de una serie de iniciativas que buscan cumplir con el objetivo que se impuso el Gobierno, de terminar con las listas de espera de patologías AUGE en dos años. La sola entrega de más recursos ha demostrado no ser la solución debido a los problemas de gestión e incentivos presentes en los centros públicos de salud. Esto aumenta el valor de soluciones más innovadoras que aprovechen la eficiencia y la capacidad del sector privado.

En primer lugar, se hizo un diagnóstico detallado por servicio de salud y patología para determinar la real magnitud de las listas de espera y se revisó el sistema computacional, registrando los casos AUGE en los servicios de salud correspondientes. A partir de esto se transparentó la información generada, publicando las listas actualizadas en la web de FONASA.

En segundo lugar, se creó el portal AUGE en línea, que permite a los

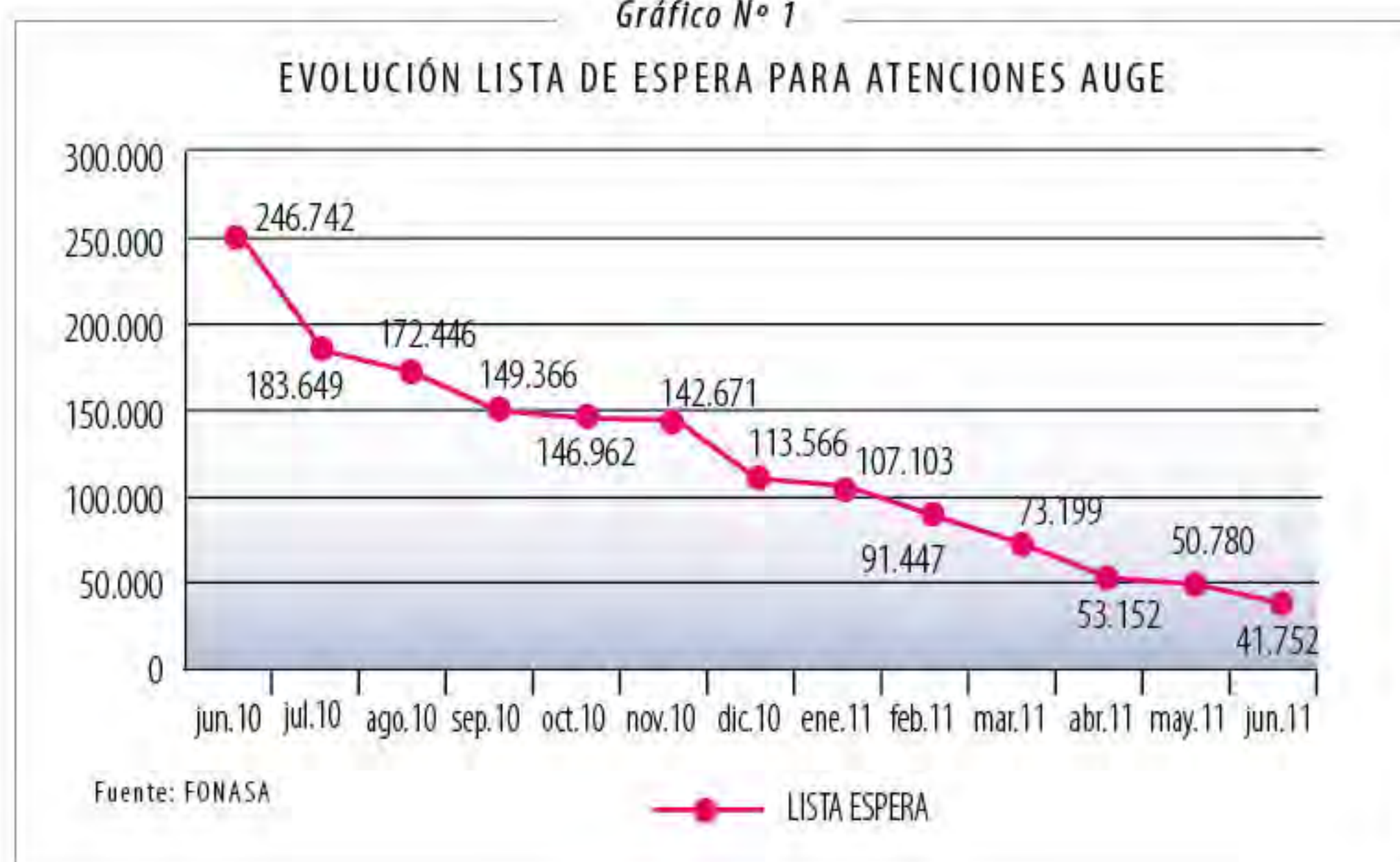
asegurados de FONASA conocer el estado de sus garantías en tiempo real y se estableció un mecanismo para alinear las transferencias a los servicios y hospitales, al cumplimiento de las metas de reducción de las listas de espera.

En tercer lugar, se efectuó una licitación de las prestaciones al sector privado, que incorporó la totalidad de las 69 patologías AUGE. De este modo, se obtuvo un convenio marco con una base amplia de oferentes, lo que generó precios competitivos para las distintas prestaciones. Esto posibilitó que aquellos servicios de salud que tienen listas de espera, puedan recurrir al sector privado y efectuar la compra de servicios clínicos. Es así como en diciembre de 2010

se creó el Bono AUGE, un instrumento con el que el asegurado de FONASA, a quien no le han respetado los plazos de atención para un problema de salud AUGE, puede acceder a la prestación requerida en otro establecimiento asistencial, público o privado, designado por FONASA.

En su momento aparecieron quienes cuestionaron la medida, pues consideraron que lo que se estaba haciendo era desviar recursos a los centros privados en lugar de mejorar el sistema de salud público. Quienes hacen esa crítica no están preocupados de mejorar la atención de salud a los usuarios, ya que con estas medidas son ellos quienes tienen el poder de escoger y desviar los recursos de acuerdo a su preferencia. En

Gráfico N° 1



definitiva se olvidan que la verdadera finalidad de la salud pública es otorgar un servicio a quienes no poseen los recursos para atenderse de otra forma, y que el hospital es el medio que permite cumplir este objetivo. Su funcionamiento no es un fin por sí mismo, sino que es el medio por el cual se consigue esta meta.

Hasta la fecha, esta medida, junto con las demás, parece haber ayudado y ha tenido el impacto positivo que esperaban quienes la plantearon, pues la lista de espera por atenciones AUGE cayó notoriamente. Como se ve en el Gráfico N° 1, en junio ésta fue de 41.752 personas, lo que representa una disminución de un 63% en lo que va del año, y de un 83% en relación al mismo mes del año pasado. Según el Ministerio de Salud, no sería descabellado esperar que este problema se acabe para fines de este año 2011.

Se aprecia que cada uno de los servicios de salud experimentó una caída en las esperas y sólo Arauco tuvo una disminución de menos del 50%. Los servicios de salud que permanecen con listas mayores a dos mil pacientes son: Metropolitano Norte (5.445), Occidente (4.319), Central (4.234), Sur (2.378) y Sur Oriente (2.003), Del Libertador Bernardo O'Higgins (3.638), Coquimbo (3.334), Del Maule (2.998) y Araucanía Sur (2.829). Respecto de las patologías, miopía, presbicia, astigmatismo e hipermetropía encabezan las prestaciones resueltas, seguidas por las operaciones de cataratas, retinopatía diabética y cáncer cervicouterino.

En otro ámbito, se ha discutido la propuesta de que los medicamentos de todas las enfermedades incluidas en el plan AUGE sean entregados a partir del año 2012 en todas las farmacias, para que los usuarios de FONASA no tengan que desplazarse a

los centros asistenciales, sino que puedan adquirir sus medicinas en puntos más expeditos y cercanos a sus casas. La idea es que sólo con la huella dactilar, las personas puedan retirar sus remedios de manera gratuita. El proyecto incluye las medicinas de enfermedades AUGE y también se está viendo la posibilidad de incluir la entrega de leche para los menores. El objetivo es mejorar la satisfacción del usuario, pues será posible asegurar a los pacientes que los remedios estén en stock y disminuir las mermas de fármacos en bodegas. Cabe aclarar que este plan no implica el cierre de farmacias en consultorios y hospitales, pues seguirán entregando los medicamentos más complejos, como son los psicotrópicos.

Lo novedoso de iniciativas como las anteriores, es que se está otorgando al usuario el poder para exigir el cumplimiento de plazos y, al mismo tiempo, para cambiar de prestador cuando no se cumple con un requisito mínimo en un servicio esencial, como es la recepción del beneficio en el tiempo necesario. El paciente pasa a ser algo así como un cliente del sistema de salud, y puede tener la libertad de elegir y de cambiar de prestador si es que no se respetan condiciones mínimas de calidad del servicio.

En cuanto a la respuesta que pueda tener el sistema de salud frente a estas medidas, se piensa que podrían actuar como un incentivo para el mejoramiento de la gestión hospitalaria, pues se requerirá un esfuerzo adicional para cumplir con los plazos de atención. Los usuarios serán los principales beneficiarios, sin embargo, estas medidas son soluciones temporales y de ninguna forma son suficientes para mejorar el sistema de salud público; sí servirá para aliviar momentáneamente el problema, y de hecho el bono AUGE está mostrando tener el éxito requerido. En el

largo plazo es necesario llevar a cabo un plan de mejoramiento de la salud pública, para que la falta de capacidad no se dé año a año, y que los beneficiarios de FONASA puedan siempre recibir una atención digna y a tiempo.

Tras los buenos resultados conseguidos gracias a las medidas tomadas para reducir las listas de espera AUGE, FONASA se hizo parte de un nuevo desafío: dar solución a cerca de 90 mil chilenos que por más de un año han esperado por una intervención quirúrgica no contemplada en el AUGE.

El programa pondrá especial atención en problemas de traumatología, gastroenterología, otorrinolaringología, oftalmología, entre otras y considera como criterio de inclusión a todos los pacientes pendientes para alguna intervención quirúrgica no urgente y no priorizada, que haya sido indicada por un médico especialista hace más de un año.

CONCLUSIÓN

Se ve cómo las medidas que se han tomado en el área de la salud han dado los frutos que se esperaban, más allá de las críticas que pudiesen tener en su momento. Si bien en el largo plazo se requiere de reformas más completas, por el momento se ha ido dando solución a los problemas de corto plazo. Para esto se escogieron las prioridades, se ordenó la información y se recurrió al uso de capacidad ociosa de los hospitales, sean públicos o privados, para así atender a los pacientes que hasta ahora habían sido postergados. Las medidas implementadas permitieron disminuir la lista de espera de atenciones AUGE en un 83% el último año móvil, pero lo más importante es que permitieron a los usuarios de FONASA recibir la atención oportuna y digna que se merecían. **LyD**



CONGRESO



Digno de aprobación sin modificaciones.



Digno de aprobación con modificaciones menores.



Requiere mejoras sustanciales.



Debe ser reformulado íntegramente.



No debiera ser aprobado (idea de legislar objetable).

Manejo en estado de ebriedad



El proyecto, con el objeto de agravar las sanciones, propone rebajar de 1,0 a 0,8 gramos por mil de alcohol en la sangre, el umbral para configurar el desempeño en estado de ebriedad de un vehículo motorizado. Consecuencialmente, se rebaja el umbral para configurar la conducción bajo la influencia del alcohol, sustituyendo el actual rango que va desde más de 0,5 y menos de 1 gr. de alcohol por mil a otro más estricto que sería de más de 0,3 y menos de 0,8 grs. de alcohol por mil.

A su vez, establece una nueva gradación de las sanciones por conducción de vehículo motorizado bajo la influencia del alcohol, dependiendo de los perjuicios ocasionados, y que van desde una multa de 1 a 5 UTM y suspensión de la licencia por 3 meses si no se ocasionan lesiones ni daños, hasta 3 años y un día a 5 de reclusión menor, multa de 8 a 15 UTM y suspensión por 24 meses si se producen lesiones gravísimas o la muerte.

Además, se aumenta la suspensión de la licencia por los delitos de conducción en estado de ebriedad o bajo la acción de drogas, desde la suspensión por 12 meses si no se producen lesiones ni daños, hasta la suspensión

por 40 meses en caso de producirse la muerte.

Finalmente, se establece que de tratarse de un condenado anteriormente por manejo en estado de ebriedad, se cancelará la licencia de conducir, permitiéndose que, después de 12 años, el juez pueda alzar la suspensión, salvo que se tratare de un conductor que ya hubiere sido sancionado por ocasionar lesiones gravísimas o la muerte, en cuyo caso el juez nunca podrá alzar la suspensión.

Se trata en definitiva, de un proyecto idóneo para la finalidad que se propone, pero debe insistirse también en educación en el tránsito, aunque sea una medida de largo plazo.

No obstante, la tipificación de un delito de peligro -que ya existe hace tiempo, pues ahora sólo se agrava la sanción- es cuestionable, cuando no se ocasionan daños ni lesiones. Bastaría con tipificar una infracción administrativa. Así también, debiera revisarse para evitar sobreponer las sanciones con otras que ya existen en la Ley del Tránsito, y que también consideran la cancelación de la licencia en ciertos casos.

Reemplazo de alcaldes



El proyecto propone que en caso de faltar permanentemente el alcalde, como puede ser por ejemplo, por muerte o renuncia, se efectúen elecciones extraordinarias, siempre y cuando faltare más de un año para el término del período. En caso de que faltare un año o menos, no habría elecciones y asumiría como alcalde el concejal más votado que pertenezca al pacto electoral en que se eligió el alcalde que origina la vacancia. En el caso que el alcalde fuera independiente que no postuló dentro de un pacto, entonces asumiría el concejal más votado independientemente de cualquier pacto o partido a que perteneciere este concejal.

En cualquiera de estos casos, el plazo del alcalde elegido, ejercerá por el tiempo que faltaba al que originó la vacancia.

En principio, no existiría inconveniente constitucional en proceder de esa forma, pero esa no es la manera como la Constitución resuelve el reemplazo cuando falta un miembro de un organismo colegiado como la Cámara o el Senado, donde están expresamente prohibidas las elecciones complementarias.

No obstante, tales elecciones "a mitad de camino" durante el cuatrienio municipal, pueden producir otras alteraciones en la administración, cuya renovación está prevista regularmente cada cuatro años, respetando un mandato democrático, otorgado en un momento determinado por un tiempo determinado. Todo sistema de reemplazo debería apuntar al suplente más cercano. Además, el costo de elecciones extraordinarias puede ser significativo.

Justicia vecinal



Esta moción parlamentaria, establece un mecanismo para la solución de conflictos vecinales, a través de una mediación que se inicia en una denuncia que se presenta ante Carabineros, siendo remitida a la "oficina de mediación" de la respectiva municipalidad, designándose un mediador. Respecto de los condominios, será mediador el presidente del comité de administración.

El mediador citará a los involucrados a una audiencia, en la que propondrá bases para un acuerdo, y en caso que éste se logre, se levantará un acta que tendrá el valor de un contrato celebrado por instrumento público, actuando el mediador como ministro de fe. De no lograrse acuerdo en los 30 días siguientes a la audiencia, se levantará un acta donde consten los desacuerdos y se remitirá al juzgado de policía local.

Durante el tiempo que dure la mediación, se suspenderán los plazos de prescripción civil o penal y las declaraciones del mediador y de las partes tendrán carácter secreto, por lo cual todos quedarán obligados a guardar secreto de los antecedentes de que hubieren tomado conocimiento durante la mediación.

Se trata de un proyecto que puede merecer reparos técnicos —entre los que se encuentra la ausencia de financiamiento, por tratarse de una materia de iniciativa exclusiva del presidente—, pero en su conjunto, constituye un antecedente positivo para la puesta en marcha —posteriormente— de un sistema de justicia vecinal, con patrocinio del Ejecutivo, en lo cual ya está trabajando en forma experimental el Ministerio de Justicia.

LANZAMIENTO LIBRO MAPA SOCIAL

Libertad y Desarrollo lanzó el libro "Chile: Mapa Social", publicación que presenta en 10 capítulos los principales temas sociales en atractivas infografías hechas por prestigiosos diseñadores. A la actividad asistieron el Ministro de Cultura, Luciano Cruz Coke, y el entonces Ministro de Planificación, Felipe Kast, quien aprovechó de agradecer a LyD, al trabajo de los diseñadores –Cristián González, Kathryn Gillmore, Manuel Figueroa, Carla Escobedo, José Manuel Allard, Dany Berczeller, Macarena López, Marcelo Duhalde, Fernando Costa, Ximena Roselló, José Neira, Rodrigo Ramírez y Juan Pablo de Gregorio– y a Denise Montt, quien coordinó a todos ellos.



1. El Presidente del Consejo de LyD, Carlos F. Cáceres, el Ministro de Cultura, Luciano Cruz Coke, el entonces Ministro de Mideplan, Felipe Kast y Luis Larraín, Director Ejecutivo de LyD. / 2. Felipe Kast en la presentación del libro. / 3. Los diseñadores junto a Luis Larraín, Carlos F. Cáceres y Felipe Kast.



Hernán Büchi, Hernán Larraín, Presidente del Senado y Ricardo Ffrench-Davis.

HERNÁN BÜCHI EN ANIVERSARIO DEL CONGRESO

En el marco de las celebraciones de los 200 años del Congreso Nacional, Hernán Büchi, Consejero de LyD, expuso en el seminario "Los desafíos de un desarrollo integral" donde también expuso el ex Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y Ricardo Ffrench- Davis, Premio Nacional de Humanidades.

CONFERENCIA DE PRENSA DE ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DEL DESEMPLEO

Una leve moderación en las perspectivas del mercado laboral chileno, consistente con la desaceleración esperada de la actividad y que puede estar siendo influida por el clima político actual, mostró la Encuesta de Percepción del Desempleo de LyD correspondiente a junio de 2011, dada a conocer por la investigadora del Programa Económico, Cecilia Cifuentes.



Cecilia Cifuentes dio a conocer la encuesta.



NUEVO COORDINADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS

El abogado José Francisco García asumió como Coordinador de Políticas Públicas de LyD. José Francisco es licenciado en Derecho y Magíster en Derecho Público de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Postítulo en Economía y Finanzas del Departamento de Economía de la Universidad de Chile. Máster (LL.M) y Doctor en Derecho (JSD) de la Universidad de Chicago. Es, además, profesor en la Universidad Católica, del Desarrollo y en la Universidad de Chile.

José Francisco García G.

TALLER MACROECONÓMICO CON TOMÁS FLORES



Carlos F. Cáceres, Tomás Flores, Cecilia Cifuentes y Luis Larraín.

El Subsecretario de Economía, Tomás Flores, fue el expositor al Taller Macro en el cual profundizó acerca de la Agenda de Impulso Competitivo y los avances que se han logrado en la materia.

TALLER DE RELACIONES EXTERIORES CON EMBAJADOR DE ESTADOS UNIDOS



El Embajador de EE.UU., Alejandro D. Wolff, Karin Ebersperger, Directora de los Talleres de RR.EE. y Luis Larraín, Director Ejecutivo de LyD.

El Embajador de EE.UU. en Chile, Alejandro D. Wolff, expuso ante una nutrida asistencia sobre "Estados Unidos y Chile: Las relaciones bilaterales". El diplomático se refirió, entre otros temas, al valor que le asigna Washington a la estabilidad política y económica de Chile en el concierto de las naciones latinoamericanas.

TALLER DE REGULACIÓN CON ALEXANDER GALETOVIC



Alexander Galetovic en su exposición.

El economista e investigador de la Universidad de Los Andes, Alexander Galetovic, fue el invitado principal al Taller de Regulación sobre la industria aeronáutica y su organización, en relación a la fusión LAN- TAM.

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN PARA PERIODISTAS

LyD, en conjunto con Economía y Negocios de El Mercurio, realizó el Curso de Especialización para Periodistas, el cual congregó a un selecto grupo de profesionales interesados en el análisis de temas sociales y económicos. Entre los expositores estuvieron el Ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet; el entonces Ministro de Planificación, Felipe Kast; el Socio Director de la Consultora Synex, Sebastián Bernstein; el Socio de Econsult, José Ramón Valente; la Presidenta de la Sociedad

de Instrucción Primaria, Patricia Matte, junto a destacados investigadores de LyD como Susana Jiménez, Rodrigo Delaveau, Cecilia Cifuentes, Paulina Henoch y Rodrigo Troncoso.

El ciclo cerró con una charla magistral dictada por el Presidente del Banco Central, José de Gregorio, quien ahondó en las claves de la política monetaria.

50 periodistas recibieron sus diplomas, acreditando su asistencia a la actividad.





CEREMONIA CONMEMORATIVA DE LA RESEÑA LEGISLATIVA N° 1.000 EN EL CONGRESO NACIONAL

Nuestra Reseña Legislativa, documento especial en el que Libertad y Desarrollo (LyD) analiza semanalmente los proyectos de ley presentados en el Congreso, celebró su edición N° 1.000 con una ceremonia especial en la Cámara de Diputados.

En la oportunidad, el Presidente de la Cámara, Patricio Melero, se refirió al rol de los distintos centros de estudio que apoyan el trabajo legislativo, que calificó como fundamental para el ejercicio de la función parlamentaria, mientras Luis Larraín mencionó la enorme importancia que tiene el análisis de los proyectos de ley en la labor diaria de LyD, destacando lo realizado por Pablo Kangiser, abogado del Programa Legislativo, quien se ha encargado de la elaboración de cada una de las reseñas.



1. Luis Larraín, la Diputada Claudia Nogueira, Pablo Kangiser, el Presidente de la Cámara de Diputados, Patricio Melero y el Senador Alberto Espina.
2. El Presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, junto al Director del Programa Legislativo de LyD, Rodrigo Delaveau.
3. Vista general de la ceremonia.
4. El Presidente de la Cámara de Diputados, Patricio Melero, entrega un reconocimiento al abogado de LyD, Pablo Kangiser.
5. Los parlamentarios asistentes a la ceremonia junto al Subsecretario de Economía, Tomás Flores, y a Luis Larraín.
6. Silvia Baeza, abogada del Programa Legislativo, junto al diputado Ernesto Silva.